



Autovía EX-A1, que actualmente conecta Navalmoral de la Mata con Moraleja. **HOY**

Infraestructuras afirma que prolongar la EX-A1 hasta Portugal sólo ahorraría siete minutos

El consejero de Infraestructuras eleva el coste de la obra a 270 millones de euros y reclama el convenio entre España y Portugal

JUAN SORIANO
Mérida

La prolongación de la EX-A1 desde Moraleja hasta la frontera con Portugal sólo ahorraría siete minutos de viaje en el lado español. Para el consejero de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, no tiene sentido que el Gobierno regional asuma en solitario esa obra sin que España y Portugal sienten las bases para dar continuidad a la carretera.

Ramírez compareció ayer en la Asamblea de Extremadura para exponer la situación en la que se

encuentra este proyecto, que según las nuevas estimaciones tiene un coste estimado de 270 millones de euros. Un gasto que el Gobierno regional no quiere asumir sin tener certezas sobre el desarrollo del proyecto.

El consejero de Infraestructuras aseguró que la EX-A1 es un proyecto estratégico para la región, por lo que supone de mejora de la movilidad y de tráfico de mercancías. Pero recaló que también debe serlo para España y Portugal, ya que con su construcción, y con la mejora añadida de la red en territorio luso, se contaría con la conexión más rápida entre Madrid y Lisboa por carretera.

Los primeros trabajos de esta autovía autonómica, entre Navalmoral de la Mata y Plasencia, concluyeron entre 2005 y 2006 con un gasto de 150 millones de euros. La Junta de Extremadura siguió construyendo hasta 2015 más tra-

mos hasta Moraleja, donde actualmente termina la carretera, con un coste total de 300 millones de euros.

Para completar la autovía e integrarla en un corredor internacional aún faltan 18,5 kilómetros hasta la frontera con Portugal, así como otros dos kilómetros de un tramo de acceso a un nuevo puente que debe construirse sobre el río Erjas. Con ello se podría enlazar con la localidad lusa de Monfortinho.

Según expuso Ramírez, los primeros estudios elaborados por la Junta de Extremadura estimaron en

Para completar la autovía aún faltan 18,5 kilómetros, en un tramo que debe construirse sobre el río Erjas

2009 que los 18,5 kilómetros que faltan hasta la frontera exigirían una inversión de 100 millones de euros. Con la actualización de los precios, 17 años después esa cifra pasa de los 200 millones de euros. Y a eso hay que añadir otros 60 millones para la carretera de acceso y el nuevo puente. En total, asegura que terminar los 22 kilómetros que faltan hasta llegar a la otra orilla en Portugal requiere una inversión de 270 millones de euros.

El consejero de Infraestructuras afirma que estos datos proceden del nuevo estudio de viabilidad encargado por el Gobierno regional, que también ha hecho un estudio para analizar la posibilidad de financiación mediante fórmulas público-privadas de pago por uso de la carretera, lo que permitiría evitar los peajes.

Pero añade que para completar ese estudio, paso previo para elaborar el proyecto, es necesario que España y Portugal firmen un convenio de colaboración que permita definir el nuevo puente internacional. Según afirmó, el Gobierno regional lleva desde 2024 pidiendo que se cierre ese acuerdo, pero ha lamentado que no se han dado los pasos para ello y que tampoco está recibiendo respuestas concluyentes por parte del Ejecutivo central.

Irresponsabilidad

El Gobierno regional considera que no tiene sentido que la Junta de Extremadura ponga en marcha la obra, como reclama el PSOE, sin tener definida la construcción del puente, ya que de lo contrario la autovía moriría en mitad de la nada. También quiere que se aclaren los compromisos participación en la obra de España y Portugal.

«Sin acuerdo con Portugal no hay puente», añadió Ramírez, quien insiste en que sin definir el nuevo viaducto sobre el río Erjas no se puede acabar el estudio de viabilidad y dar paso a la obra. Por ese motivo, asegura que «licitar sin acuerdo es una irresponsabilidad».

En cualquier caso, afirmó que aún hay estudios en marcha sobre la viabilidad ambiental de las obras en Portugal. De modo que incluso con el puente ya definido la nueva autovía desembocaría al otro lado de la frontera en una carretera convencional, con lo que no tendría sentido acometer una costosa inversión sólo para reducir en siete minutos el tiempo de viaje.

Además, la iniciativa exige adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para hacer cumplir la normativa vigente en materia de dotación de medios personales, reforzar el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Badajoz y corregir el «anormal funcionamiento» de un servicio esencial para la tutela judicial efectiva, especialmente en procedimientos que afectan a menores, familias y víctimas de delitos.

Alegre explicó que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se constituyen como órganos técnicos multidisciplinares adscritos al

Cotrina censura el rechazo de la Junta a acoger a más menores migrantes

A. B. H.
Plasencia

El PSOE rechaza la negativa del Gobierno regional a acoger a más menores migrantes no acompañados. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Óscar Fernández, aseguró ayer que solo quedan 14 plazas libres en el sistema de protección y que, por tanto, no hay capacidad para asumir a más menores extranjeros.

«Las 14 plazas disponibles no están reservadas exclusivamente para menores extranjeros no acompañados, sino que constituyen la capacidad restante para atender cualquier ingreso en el sistema de protección, incluidos menores extremeños que puedan necesitar tutela por parte de la administración autonómica», expuso Fernández Calle.

El secretario general del PSOE y presidente del grupo parlamentario, Álvaro Sánchez Cotrina, critica la postura de la Junta. «Con el presupuesto más alto de la historia de Extremadura, el Gobierno de María Guardiola dice estar al borde del colapso por atender a 107 menores», censura el líder socialista. «Si con 8.854 millones no son capaces de garantizar un sistema digno de protección a la infancia, el problema no son los menores... El problema es la gestión y su propia humanidad», afirma.

El PSOE critica igualmente que Extremadura no participe en la sectorial de adolescencia e infancia para abordar la distribución. La portavoz parlamentaria, Isabel Gil Rosiña, ha calificado esta decisión de «auténtica sinvergonzonería».

La portavoz socialista ha asegurado que el Gobierno de Guardiola está dejando a Extremadura sin voz en un asunto de enorme trascendencia y ha criticado la incoherencia del Ejecutivo autonómico. «Este es el mismo Gobierno que dice querer ayudar a Venezuela mientras ha desmantelado la cooperación internacional».

PP y Vox piden al Ministerio que termine con el colapso del Instituto de Medicina Legal

REDACCIÓN
Badajoz

Los grupos parlamentarios del PP y Vox se unieron ayer en la Asamblea de Extremadura para exigir al Gobierno de España que corrija el «anormal funcionamiento» del Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Los 'populares' se sumaron de esta

forma una propuesta de pronunciamiento que defendió Vox en el pleno de la Asamblea de ayer y que contó con el rechazo del PSOE y de Unidas por Extremadura.

La diputada de Vox Eva María García Alegre presentó la propuesta en la que critica que el «colapso» de los institutos de medicina legal supone el abandono del justiciable.

Por ello, insta al Gobierno de España a reconocer formalmente la situación de «colapso» que padecen los expedientes pendientes de tramitación en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, así como las consecuencias que dicho bloqueo está provocando en el funcionamiento de la Administración de Justicia y en los derechos de los justiciables.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o, en su caso, a aquellas comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia.

De acuerdo con la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, Badajoz se encuentra dividida en 14 partidos judiciales, a los que debe prestar asistencia el referido equipo de atención psicosocial.

Dicho equipo está compuesto por un profesional de la psicología y un trabajador social, una ratio que ya resulta «insuficiente», en opinión de la diputada de Vox.